Imprimir

La llamada “guerra contra las drogas” es sin duda la más grande farsa en la historia de la humanidad. Billones de dólares se han gastado en el supuesto combate, miles de personas han muerto, miles de hectáreas han sido fumigadas con glifosato.
Mientras se aumenta el consumos de drogas en el mundo, los único resultados de la “guerra contra las drogas” han sido el creciente poder de las mafias en todo el mundo, comunidades rurales y urbanas sometidas al poder territorial o a los asesinatos de los narcotraficantes que las oprimen, selvas destruidas, desplazamientos forzados, mayor concentración de la propiedad de la tierra y debilitamiento de las organizaciones sociales que resisten a las mineras, petroleras y demás transnacionales y megaproyectos que se quieren apoderar de sus territorios.

La decisión del gobierno de Duque de reiniciar las fumigaciones con glifosato es una abierta violación de la decisión anterior del ministerio de Salud que se basó en las investigaciones internacionales que mostraron que el glifosato puede producir cáncer. Aunque la Monsanto, ahora propiedad de Bayer, movilizó toda una maquinaria para contrarrestar los resultados de pesquisas en diversos sitios del mundo, variadas investigaciones científicas demuestran hace años los nefastos efectos del glifosato sobre la fauna, flora y suelos.

En Estados Unidos Monsanto tuvo que pagar millonarias indemnizaciones a agricultores que usaron glifosato con las instrucciones de protección, pero contrajeron linfoma. Las personas que recibieron o recibirá glifosato del cielo no tienen ninguna de las medidas de protección que la empresa productora recomienda a los agricultores en los empaques e instrucciones del producto.

La decisión del gobierno de Duque hace parte además del programa del uribismo de volver añicos los acuerdos de paz, que tomaron la opción de la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales, la cual sólo se ha cumplido en mínimos porcentajes por la incompetencia y falta de voluntad política, pero también, porque cuando se trata de volver trizas la paz, se vuelve imposible ofrecer condiciones de seguridad a las comunidades.

Las comunidades indígenas del Cauca, las autoridades de los resguardos, la guardia indígena y el CRIC, como parte de la lucha por la paz, han tomado y llevado adelante con valentía la decisión de completar esa substitución en su territorios y no permitir que ningún grupo armado imponga algún cultivo o narcotráfico en los resguardos. Esto ha costado la vida de valiosos dirigentes, mártires, como Cristina Bautista y Sandra Liliana Peña, entre otros.

Para que el desangre y la destrucción de los bosques no continúen es urgente cambiar de política sobre la marihuana y la coca. Es algo que se impone internacionalmente. Ya Holanda, 15 estados de Estados Unidos que incluyen a New York y Los Ángeles, el distrito de Washington y Canadá han regulado el comercio y consumo legal de marihuana y México está próximo a una nueva ley. Mientras, en el Cauca sigue muriendo gente por causa del tráfico ilegal de la hierba.

La comisión primera del senado aprobó en primer debate el proyecto de ley para regular el uso de la coca, presentado por los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia. Una lucecita en el camino, que debe abrirse.

Pero no podemos subestimar los intereses creados opuestos a una nueva política. Por una parte están la mafia, los acaparadores de tierra. También, la concentración de capitales movida a los paraísos bancarios. Pero además está el enorme lucro político logrado cuando los jóvenes de los barrios populares en vez de revolucionarios son vendedores de droga a quienes se les puede disparar por cualquier motivo, cuando como dice el investigador mexicano Víctor Quintana, hay “lucha de carteles en vez de lucha de clases” y los indígenas desplazados de la selva ya no son sólo alcohólicos sino drogadictos.

La “guerra contra las drogas” desestabiliza países, alimenta al narcotráfico, ayuda a destrozar la paz de Colombia y ahora pretende justificar la agresión a Venezuela, generando la violenta fase final de una guerra económica con contrabando, bloqueo, confiscación de empresas, oro y cuentas, adelantándola mediante equis disidencia y “Los Rastrojos”.

La rspuesta está en la organización de las comunidades rurales y urbanas para ejercer un

nuevo poder concreto en los territorios, en la reforma agraria para que cese la colonización de las selvas, en las reservas ambientales, reservas campesinas, resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos, en los cinturones verdes de las ciudades, en la recuperación de la soberanía alimentaria de Colombia, en deshacerse de la lacra de los tratados de libre comercio e inversión, en la sustitución de la empresa colonial por la economía para la vida.

Héctor Mondragón

Foto tomada de: https://occidente.co/